

## **Tratamiento y cesión de los datos contenidos en el Padrón Municipal de Habitantes - Año 2000**

El tratamiento de los datos contenidos en el Padrón Municipal y su régimen jurídico viene recogido en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, normativa que debe considerarse como la disposición de creación del fichero «Padrón municipal», en cuyo cumplimiento los municipios deben organizar y mantener el fichero previsto legalmente.

De la LBRL se deduce que la finalidad para que sirven los datos del Padrón municipal es la constitución de la población del municipio (artículo 15.2 LBRL), la adquisición de la condición de vecino (art. 15.3 y 4) y la acreditación de la residencia en el municipio y del domicilio habitual del mismo (art. 16.1).

Para la efectividad del cumplimiento de estas finalidades se establece la obligación de inscripción en el Padrón municipal por parte de quien resida habitualmente en el municipio respectivo, lo que supone una excepción al principio básico de la necesidad del consentimiento del ciudadano para la legalidad del tratamiento de sus datos, contenido en el artículo 6.1 de la LOPD. Esta excepción se funda en lo establecido en el artículo 6.2 que permite el tratamiento incontestado de los datos por parte de las Administraciones Públicas "para el ejercicio de sus funciones ... en el ámbito de sus competencias".

Por otra parte, y en cuanto a las cesiones de los datos del padrón, debe recordarse que, siendo Padrón un fichero de titularidad pública, deberá partirse, del principio de delimitación de la finalidad en las cesiones entre Administraciones Públicas consagrado por el artículo 21 de la LOPD, al exigir que si los datos son cedidos a otras Administraciones Públicas sirvan sólo para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre materias semejantes, con la única excepción, tras la STC de 30 de noviembre de 2000, de que el cambio de finalidad esté fundado en una de las causas contenidas en el artículo 11 de la Ley, pudiendo ser sustituida la necesidad del consentimiento para el cambio de finalidad por una previsión realizada en una disposición con rango de Ley (art.11.2 a).

Asimismo, del apartado tercero de dicho artículo 21 se deduce que no es posible, sin el consentimiento del ciudadano, ceder datos de un fichero de titularidad pública a uno de titularidad privada, salvo previsión legal en contrario.

La norma de creación del Padrón Municipal, (LBRL) recoge en su artículo 16.3 los principios que rigen la transmisión de los datos del Padrón Municipal, estableciendo que "los datos del Padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes. También pueden servir para

elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Fuera de estos supuestos, los datos del Padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

La Agencia Española de Protección de Datos ha considerado que la expresión «datos del Padrón municipal» que se emplea en el artículo 16.3 de la LBRL se refiere únicamente a los datos que en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón municipal: la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio. Por ello, cualquier cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la LOPD se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba.

Existen numerosas excepciones a esta regla general, entre otras:

- 1.- Las establecidas en las Leyes Orgánicas de Reclutamiento y de Régimen Electoral General,
- 2.- La establecida en el artículo 11.2 de la LOPD, respecto de cesiones a la Administración Sanitaria,
- 3.- La consagrada por el artículo 22 de la LOPD, respecto de cesiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
- 4.- Las previsiones de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, Reguladora de los Estados de alarma, excepción y sitio,
- 5.- La establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 11.2 d) de la LOPD, respecto de la colaboración con la Administración de Justicia y determinadas instituciones públicas,
- 6.- La contenida en el artículo 112 de la Ley General Tributaria, de colaboración con la AEAT,
- 7.- La prevista en la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a procedimiento recaudatorio de recursos.

Por último, se ha planteado la incidencia que sobre esta materia ha podido producir lo establecido, en cuanto al Registro Poblacional, la Disposición Adicional 2ª de la LOPD, según cuyo párrafo primero "la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Instituto Nacional de Estadística, sin consentimiento del interesado, una copia actualizada del fichero formado con los datos del nombre, apellidos, domicilio, sexo y fecha de nacimiento que constan en los padrones municipales de habitantes y en el censo electoral correspondientes a los territorios donde ejerzan sus competencias, para la creación de ficheros o registros de población".

A juicio de la Agencia esta disposición prevé exclusivamente la posibilidad de que el censo poblacional al que la misma se refiere pueda ser solicitado por las Administraciones Estatal y Autonómica del Instituto Nacional de Estadística, único al que se autoriza expresamente la cesión in consentida de los datos a que la Disposición se refiere, por lo que los Ayuntamientos sólo podrán ceder los datos padronales en aquellos supuestos que se han indicado. En los demás casos, sólo está admitida por la Ley la cesión que efectúa el Instituto Nacional de Estadística, en los términos previstos en la citada Disposición Adicional Segunda.